

# LOS EMPRESARIOS Y EL ESTADO EN MÉXICO (1976-1982)

CARLOS ARRIOLA  
Y JUAN GUSTAVO GALINDO

## LA HERENCIA DE ECHEVERRÍA

EN LOS ÚLTIMOS años del sexenio del presidente Echeverría, los organismos empresariales desafiaron abiertamente al gobierno y se opusieron a muchas de sus políticas: difundieron rumores para desestabilizarlo, se negaron a invertir en el país y trasladaron capitales al exterior, con lo cual obstaculizaron —y a veces pusieron en entredicho— la acción del Estado.

No en balde la palabra clave de la campaña presidencial de López Portillo fue “todos”, y el objetivo, lograr una “alianza para la producción”. Fue notable también que su discurso de toma de posesión del 1º de diciembre de 1976 se haya dirigido, en especial, a los empresarios y a las clases medias urbanas, y que haya insistido en temas como la programación, la eficiencia y la honestidad en el manejo de los asuntos públicos. Más notable aún fue la falta de las usuales referencias a la Revolución Mexicana y la omisión, en el programa de gobierno, de temas populistas como el reparto de tierra o la educación gratuita. Las acostumbradas promesas renovadas cada seis años quedaron atrás, y en su lugar el nuevo presidente pidió a unos colaboración, a otros perdón y a todos tiempo. En otras palabras, López Portillo cerró o al menos interrumpió una larga tradición de estilo y lenguaje “revolucionarios” para anunciar una nueva etapa en la vida política del país, en la cual las elecciones serían la principal fuente de legitimidad, y la eficiencia y la honestidad, los medios para resolver problemas ancestrales. Aunque todos los empresarios convinieron en la necesidad de respaldar al presidente, la desconfianza y la falta de colaboración subsistieron en los primeros meses del nuevo gobierno, y aquéllos no apoyaron la “alianza para la producción”; en las organizaciones empresariales empezaron a definirse dos tendencias, que podríamos denominar radical y moderada.

La tendencia radical se caracterizó por la gran heterogeneidad de su composición, actitudes y planteamientos, ya que la formaban numerosas asociaciones patronales de provincia y algunas organizaciones cívicas locales o regionales poco representativas y con reducido poder económico. La única organización empresarial importante que podría incluirse en esta tendencia, aunque con reservas, fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). Participaron en la misma corriente algunos dirigentes em-

presariales que, por su destacada actuación en los últimos años del gobierno anterior, tenían prestigio dentro del gremio y un reconocido liderazgo nacional.<sup>1</sup> Es muy importante destacar el carácter amorfo de esta corriente, ya que no se organizó alrededor de un programa o de un líder. Sus ideas y actitudes se manifestaron durante las campañas para elegir a los dirigentes de los organismos empresariales. Estas ideas eran una mezcla de anticomunismo, rechazo al papel rector del Estado, temor o inseguridad ante la fuerza del gobierno, y búsqueda de medios para influir sobre el aparato estatal en forma sistemática y decisiva.

La tendencia moderada estuvo encabezada por la mayor parte de los dirigentes nacionales de las organizaciones empresariales que tienen el carácter de "instituciones públicas", como la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO). Estos empresarios radicados en el Distrito Federal o el Estado de México tienen una visión más realista de las relaciones del sector privado con el Estado, porque los contactos de las cámaras con los organismos gubernamentales son constantes y oficiales. No hubo en los programas de esta tendencia planteamientos propiamente políticos, sino más bien demandas de carácter gremial para defender intereses inmediatos y muy concretos.

Las concepciones divergentes del papel que deberían desempeñar los organismos empresariales en la vida pública, desembocaron en una serie de enfrentamientos entre los empresarios de la tendencia radical y los de la moderada en las elecciones de los principales organismos empresariales, que tuvieron lugar entre 1977 y 1979. Desapareció la discreción que siempre había rodeado los procesos internos de elección y se manifestaron las diversas tendencias políticas así como las ambiciones personales.<sup>2</sup>

## LA RECONCILIACIÓN

La poca proclividad de los empresarios, en general, a asumir posiciones radicales o a comprometerse en acciones políticas, eliminaron a los representantes de la corriente radical del control de las organizaciones empresariales por el resto del sexenio. Además, la actitud conciliatoria que asumió el gobierno (y en lo personal el presidente López Portillo), aunada a las perspectivas favorables de la economía mexicana (los primeros ingresos por la venta de energéticos se recibieron en 1979), alejó la "incertidumbre y la desconfianza" que los empresarios sintieron en los últimos años del gobierno de Echeverría.

El 15 de junio de 1979, las organizaciones empresariales publicaron un manifiesto en la prensa nacional suscrito por todos los dirigentes empresariales, incluido Bernardo Garza Sada, presidente del poderoso Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Decía el manifiesto:

<sup>1</sup> Fue el caso de Andrés Marcelo Sada, ex-presidente de la COPARMEX y poderoso industrial de Monterrey, y el de Jorge Sánchez Mejorada, ex-presidente de la CONCAMIN y del CCE.

<sup>2</sup> Para ampliar el punto de los conflictos en los organismos empresariales, véase Carlos Arriola, *Los empresarios y el Estado*, México, Secretaría de Educación Pública, 1981.

La producción, el ahorro, la inversión y el empleo en los últimos dos años han tenido un crecimiento importante, como resultado de la solidaridad responsable y activa de todos los sectores sociales que ha generado la Alianza para la Producción, por lo cual el panorama de México a mediano y largo plazo es sumamente positivo.

Sin embargo; las organizaciones consideraron indispensable luchar contra la inflación, y para ello pidieron a todos los empresarios que se comprometieran a realizar un decidido y constante esfuerzo para frenar el alza general de los precios de mercancías y servicios. Además del compromiso “voluntario y solidario” de cada empresario, se estaba formulando —según los signatarios del manifiesto— compromisos concretos para aumentar la producción, mejorar la distribución de los productos básicos y “sostener sus precios por plazos convenidos”. Otra promesa era “acelerar al máximo el ritmo de las inversiones generadoras de mayor producción y empleo”.<sup>3</sup> Días después, el presidente de la CONCAMIN, Ernesto Rubio del Cueto, y el de la CONCANACO, Guillermo de Zamacona, afirmaron que había tranquilidad, confianza y seguridad en todos los sectores, lo que permitiría llevar a cabo, en colaboración con el gobierno, el programa de producción de diecisiete bienes básicos,<sup>4</sup> e iniciar su distribución en dieciséis ciudades piloto. Llamó la atención que además de colaborar con la Secretaría de Comercio, los empresarios ofrecieron cooperar con la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), *bête noire* de los comerciantes. Los dirigentes empresariales dijeron también que, aunque no hubiera control de precios, “existía un espíritu de disminuir las utilidades” en los productos básicos (los márgenes serían del 7 al 11 por ciento), y se solicitaría para ellos la exención de los impuestos por ingresos mercantiles.

En julio de 1979 tuvieron lugar las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados, primeras que se realizaban después de la reforma política. Ésta creó, para los partidos políticos, un amplio espacio que les dio acceso a los medios de comunicación, y les proporcionó recursos para financiar sus campañas, al menos parcialmente. Aunque no todos los dirigentes empresariales se pronunciaron sobre las elecciones, uno de los más importantes, el presidente de la CONCAMIN, afirmó pocos días antes de su celebración que no alterarían la confianza de los empresarios en el futuro del país, ni modificarían el ritmo de las inversiones programadas:

La reforma política hará patente el clima de apertura democrática que prevalece en el país y dará oportunidad para que se demuestre la madurez cívica de la población de votar en favor de los candidatos y de las corrientes ideológicas que más les simpaticen.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> *El Día*, 15 de junio de 1979. El manifiesto fue suscrito por los presidentes de las principales organizaciones: Prudencio López (CCE); Guillermo de Zamacona (CONCANACO); Ernesto Rubio del Cueto (CONCAMIN); Manuel Clouthier (COPARMEX); Rolando Martínez (ABM) y Emilio Cano Escalante (CANACO del DF)

<sup>4</sup> Los principales productos básicos fueron aceite, frijol en grano, café, pastas, galletas, arroz, leche evaporada. Véase *Excelsior*, 16 de junio de 1979.

<sup>5</sup> Declaraciones de Ernesto Rubio del Cueto, *Excelsior*, 28 de junio de 1979.

El tercer informe de gobierno dio lugar a que el sector privado manifestara nuevamente su confianza en la política presidencial. El presidente de la CONCANACO, Guillermo de Zamacona, declaró: "Basta apreciar los signos de crecimiento del ahorro, del empleo y de la extraordinaria captación bancaria para saber que (el informe) será un documento sólido y optimista. No hay inseguridad con respecto a lo que en él se dirá."<sup>6</sup> Insistió, además, en la buena disposición de los comerciantes para cooperar en la distribución de los artículos de consumo básico. Días después del informe, el presidente de la CONCAMIN, Ernesto Rubio del Cueto, estimó que la recuperación económica del país en los tres últimos años se debía a un decidido esfuerzo de congruencia del gobierno de López Portillo, que llevó a los empresarios a abandonar su escepticismo frente a las intenciones de planeación de los funcionarios públicos. Añadió estar convencido de que la política económica de López Portillo "sería seguida hasta el final del sexenio contra viento y marea".<sup>7</sup>

La confianza de los empresarios en esa política se acentuó al acercarse la sucesión presidencial, tema sobre el que se pronunciaron varios de ellos. A fines de 1980, el presidente del Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI), Ernesto Atman Obregón, opinó que el presidente sucesor no debería cambiar ni el ritmo ni la dirección de la política de López Portillo, ya que cualquier país que aspire a lograr el desarrollo pleno y la industrialización debe procurar que las transferencias de poder sean graduales y sin variaciones bruscas. Añadió que los líderes sindicales y de los partidos políticos de izquierda estaban equivocados, porque el gobierno no tendía hacia la derecha sino que favorecía el crecimiento económico y propiciaba la formación de riqueza para repartirla. Por último, estimó que la estructura industrial existente y el desarrollo conseguido habían creado un sistema atractivo para la inversión extranjera, reforzado por la estabilidad política y social. El clima de "socialización" que había en Europa, la recesión en Estados Unidos y los conflictos en Medio Oriente, favorecían también la inversión extranjera en México.<sup>8</sup> A finales de 1980, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Prudencio López, opinó que la situación política afectaría el desarrollo en 1981, pero a pesar de ello "no se desalentaría la inversión ni el ritmo de crecimiento", ya que las tasas de crecimiento obtenidas en los últimos tres años habían dado confianza a los empresarios en el futuro del país.

A lo largo de 1981, las declaraciones de los líderes empresariales no sólo continuaron en la misma dirección, sino que adoptaron un tono que podría calificarse de eufórico en su apoyo al presidente López Portillo; se llegó a caracterizar su gobierno como "radicalmente diferente" del anterior. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) afirmó: "No existe ningún motivo para retraer inversiones y menos para pensar en una salida de capitales." El mismo líder sostuvo "que el país no caería en una crisis como la observada en los últimos años del gobier-

<sup>6</sup> *Excélsior*, 22 de agosto de 1979.

<sup>7</sup> *El Día*, 14 de septiembre de 1979.

<sup>8</sup> *Unomásuno*, 1° de diciembre de 1980.

no de Echeverría".<sup>9</sup> Por otra parte, los empresarios reiteraron que no se inmiscuirían en los procesos electorales, e insistieron en el carácter apolítico de sus organizaciones.

Sin embargo, la confianza otorgada a López Portillo fue menos clara en lo que se refiere a su política económica propiamente dicha. Los dirigentes mantuvieron una posición por lo general ambigua, aunque no siempre. Ante la inflación los banqueros se mostraron cautelosos, y los partidarios de una política de gasto público elevado fueron los comerciantes, como era de esperar. Las reservas frente a la política económica del gobierno no desembocaron en críticas abiertas pero se acentuaron hacia finales del sexenio, conforme se agudizaban los problemas y se acercaba la crisis que todos presentían pero que, salvo excepciones, la mayor parte no quiso aceptar.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), dependiente del CCE, expresó las reservas más importantes. Desde junio de 1979, sus economistas advirtieron que el desequilibrio presupuestal había obligado al Estado a incrementar la emisión de dinero y el encaje legal, y a recurrir cada vez más al endeudamiento externo, lo que agravaba la inflación, disminuía los recursos disponibles para la inversión y aumentaba la dependencia del ahorro externo. Para equilibrar las finanzas públicas, los economistas recomendaban ajustar el gasto a las posibilidades reales de la economía, y sanear las finanzas de empresas paraestatales y organismos descentralizados ("quienes ejercían fundamentalmente el déficit") exigiéndoles mayor eficiencia y aumentando los precios de los bienes y servicios que proporcionan.<sup>10</sup> El presidente del CCE reiteró estos comentarios. En varias ocasiones (por ejemplo, en el Foro Internacional de Empresarios, organizado en Monterrey en junio de 1979, y en la asamblea conmemorativa de los cincuenta años de la COPARMEX, en octubre del mismo año), pidió que el presupuesto de egresos de 1980 se caracterizara por su austeridad, y que disminuyeran el circulante y los subsidios "aunque se elevaran los precios". El presidente de la COPARMEX, que en ese entonces era Manuel J. Clouthier, se pronunció en los mismos términos, pero el presidente de la CANACINTRA asumió una posición ambigua, y declaró que "el presupuesto debería ser flexible y acorde con la realidad".<sup>11</sup>

Asimismo, el conocido empresario Andrés Marcelo Sada Zambrano y el economista Julio A. Millán advirtieron sobre los problemas de la economía. El primero señaló que la contribución del sector privado para "desacelerar" la inflación sería mayor si no fuera por las limitaciones que implicaban la escasez de materias primas, los problemas laborales, la falta de capacidad industrial (a pesar del aumento de las inversiones) y la insuficiencia del transporte,

<sup>9</sup> Véanse las declaraciones de José Porrero Lachte, presidente de la CANACINTRA, *Excélsior*, 2 de diciembre de 1980; Ernesto Rubio del Cueto, presidente de la CONCAMIN, *Excélsior*, 21 de mayo de 1981; Jorge Chapa, *Excélsior*, 23 de julio de 1981; José Luis Coindreau, *Excélsior*, 4 de junio de 1981.

<sup>10</sup> *El Universal*, 13 de junio de 1979.

<sup>11</sup> *Excélsior*, 19 de octubre de 1979.

que en 1979 se reveló como “uno de los grandes cuellos de botella de la economía”. Sada Zambrano opinó que había indicios claros de amenaza de un nuevo período inflacionario.<sup>12</sup> Julio A. Millán expuso los problemas que podría acarrear un ejercicio ineficaz del gasto público —se refería a las empresas paraestatales— aunado al estancamiento de la producción agropecuaria y a la contracción de las exportaciones de manufacturas. Sobre este punto, dijo que la industria mexicana no podría competir en el extranjero mientras la tasa de inflación fuera superior a la internacional y se insistiera en mantener un tipo de cambio fijo.<sup>13</sup>

En la euforia del auge petrolero, no se escucharon las pocas voces de los empresarios y algunas del sector público que denunciaban las consecuencias del exceso de gasto. En junio de 1980 fue reelegido presidente del CCE Prudencio López, quien declaró que la inversión privada y la economía en general seguirían avanzando “vigorosamente”. Afirmó también que aunque la inflación alcanzaría una tasa de entre 20 y 23 por ciento, se esperaba que en 1981 el proceso inflacionario tendiese a la baja porque el gobierno estaba disminuyendo el circulante, y se estaba “abatiendo sensiblemente” el proceso de dolarización del país.<sup>14</sup> En el mismo sentido se pronunció, en ese año, el ex-presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM), José Pintado.<sup>15</sup> Los únicos que confesaron públicamente haber solicitado a López Portillo la devaluación del peso, fueron los dirigentes de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) y de la Asociación de Industriales de Vallejo, porque era difícil exportar debido a la sobrevaluación del peso. Ni sus colegas empresariales ni el sector público escucharon a los dirigentes de la ANIERM, pues el presidente del CCE declaró que la mayoría del sector privado apoyaba el régimen de flotación del peso, y sólo una corriente minoritaria defendía la devaluación. Prudencio López también negó que hubiera fuga de capitales, y opinó que la preocupación principal era abatir el proceso inflacionario.<sup>16</sup>

En los primeros días de 1981, los principales dirigentes empresariales reafirmaron su lealtad al Estado y su compromiso con López Portillo de seguir trabajando. El presidente del CCE manifestó que el sector privado no era un grupo de presión que restara poder al Estado; añadió que los empresarios se comprometían a participar en cualquier esfuerzo para aumentar la productividad y la eficacia del aparato productivo, y para modernizarlo, sobre todo. En los mismos términos se pronunciaron José Luis Coindreau, presidente de la COPARMEX, Ernesto Rubio del Cueto, de la CONCAMIN, y Jorge Chapa, de la CONCANACO. Este último dijo que sin armonía no se lograría el desarrollo económico ni crecería el empleo. Estimó que el futuro del país era pro-

<sup>12</sup> *Novedades*, 15 de julio de 1979.

<sup>13</sup> *El Día*, 29 de noviembre de 1979. En el sector público hubo también muchas opiniones en este sentido.

<sup>14</sup> *Novedades*, 21 de junio de 1980.

<sup>15</sup> *Excelsior*, 17 de octubre de 1980 y 2 de noviembre de 1980.

<sup>16</sup> *Unomásuno*, 5 de diciembre de 1980.

misorio “como pocos países pueden presumir”. Coincidieron estos líderes en la necesidad de abatir la inflación y de establecer una colaboración estrecha entre todos los sectores productivos.<sup>17</sup>

López Portillo continuó dando al sector privado seguridad sobre su política. En la Reunión de la República celebrada en Hermosillo, reafirmó el valor de la propiedad privada. Los empresarios recogieron esta declaración, y por voz de su líder máximo, Prudencio López, afirmaron que en México existía un régimen de derecho que debería prevalecer como base indiscutible de crecimiento y desarrollo. En las reuniones de los principales organismos empresariales a las que asistió el presidente de la República en marzo y mayo de 1981, los dirigentes le manifestaron apoyo decidido y aprovecharon la oportunidad para reforzar ciertas tesis. Así, José Luis Coindreau condenó el populismo y “la burocracia que asfixia”, y anunció la formación de la Unidad de Producción Emiliano Zapata, integrada por 121 ejidatarios y 25 pequeños propietarios de Guanajuato, promovida por la COPARMEX. Se mostró sumamente optimista ante el futuro económico del país y la vigencia del sistema político mexicano, que no necesitaba de “fórmulas extranjeras”. Declaró:

Sólo los pepenadores de inquietudes y de utopías delirantes pueden negar nuestra realidad. Es necesario dejar a los de las tinieblas y a los de los colores subidos que se aniquilen en su amargura. A los demás mexicanos, a la enorme mayoría, nos toca seguir llenando este vaso de nuestra patria.<sup>18</sup>

En la asamblea general de la CONCAMIN, el presidente saliente, Ernesto Rubio del Cueto, manifestó optimismo porque desde 1980 los mexicanos habían seguido el camino de la modernización. Estimó que en ese año la inversión privada sería de seiscientos mil millones, y esperaba un aumento de 15% en 1982.<sup>19</sup> La reunión más importante en el primer semestre de 1981 tuvo lugar en el CCE; asistió López Portillo, pero se celebró a puerta cerrada. En esta reunión fue elegido nuevo presidente del CCE el sinaloense Manuel J. Clouthier, cuya franqueza muy localista se tradujo a menudo en una mezcla de agresividad y simplificación al analizar los programas y políticas gubernamentales. Después de la reunión, Clouthier expresó en sus declaraciones un apoyo irrestricto a López Portillo, la esperanza de que el gobierno no cayera en el populismo, y la promesa de que el sector privado no se inmiscuiría en la sucesión presidencial. Además, pidió poner fin al “maniqueísmo”, causa de enfrentamientos estériles que no conducen a ningún lugar, y afirmó que los empresarios no son dogmáticos ni rehusan dialogar con el movimiento obrero, pero consideró que no podía aceptarse la jornada laboral de cuarenta horas ni el seguro contra el desempleo. Dijo que el principal combate debería ser contra la inflación, solicitó que el gobierno federal sujetara el gasto público

<sup>17</sup> *Unomásuno*, 14 de enero de 1981, y *Excélsior*, 12 de enero de 1981.

<sup>18</sup> *Unomásuno*, 21 de marzo de 1981.

<sup>19</sup> *Unomásuno*, 1° de junio de 1981.

a fin de tener ahorros que pudieran dedicarse a otros renglones, y demandó reducir el endeudamiento externo sin detener los programas sociales.<sup>20</sup>

Es importante subrayar que a mediados de 1981, pese a la caída de los precios del petróleo, los dirigentes empresariales no asumieron en público una actitud de alarma, y negaron que hubiera peligro de recesión. Uno de ellos declaró: "La reducción del gasto público no afectará los planes de desarrollo y en cambio permitirá reducir la inflación."<sup>21</sup> Manuel J. Clouthier pidió a empresarios y sector público que invirtieran más en actividades productivas y redujeran sus gastos improductivos —para mantener el ritmo de crecimiento económico y crear empleos— y que contribuyeran a una distribución más equitativa de la riqueza.<sup>22</sup> Jorge Chapa, presidente de la CONCANACO, declaró: "No somos víctimas ni del temor ni del desaliento; México no se enfrenta a ninguna crisis económico-política y no tiene por qué estar asustado."<sup>23</sup> A su vez, Alfonso Pandal Graf, presidente de la CONCAMIN, manifestó:

Los industriales no están para discutir seguridades o inseguridades en la inversión. Desde principios del sexenio nos la jugamos con México a fondo y a morir; ahora vemos que tenemos la salida a nuestros problemas, ya que el panorama es diferente porque no estamos en crisis y existen perspectivas altamente positivas.<sup>24</sup>

El caso del grupo Alfa, en 1981, ilustra la reconciliación entre empresarios y Estado. Desde mediados del año, la revista *Razones* publicó dos artículos en los que planteaba las dificultades financieras de Alfa. El rumor no era injustificado. Según la revista, el grupo industrial intentó diversificar sus actividades, creció sin la planeación adecuada y tuvo dificultades para consolidar nuevas empresas en ramas de la producción que no conocía. Además, el grupo aumentó exageradamente el número de ejecutivos de alto nivel, y un acentuado nepotismo caracterizó su funcionamiento. En noviembre, el gobierno tuvo que otorgarle un crédito enorme de doce millones de pesos por medio del Banco Nacional de Obras Públicas (BANOBRAS) y adquirió cinco mil millones de acciones preferentes (sin derecho de voto), lo que según la revista causó gran indignación en la opinión pública.<sup>25</sup> Hacia fines de 1981, parecía no haber habido mejor sexenio para los empresarios que el de López Portillo.

## EL DISTANCIAMIENTO (1982)

Al iniciarse 1982, el último año del sexenio de López Portillo, se manifestaron claramente las deformaciones de la economía que tendrían efectos explosivos

<sup>20</sup> *Excélsior* y *Unomásuno*, 29 de mayo de 1981.

<sup>21</sup> José María Basagoiti, presidente de la COPARMEX. En el mismo sentido se pronunciaron los presidentes de la CONCAMIN, la CONCANACO y la CANACINTRA. Véase *Unomásuno*, 17 de julio de 1984.

<sup>22</sup> *Excélsior*, 4 de julio de 1981.

<sup>23</sup> *Excélsior*, 23 de julio de 1981.

<sup>24</sup> *Excélsior*, 13 de agosto de 1981.

<sup>25</sup> *Razones*, 1981, núms. 39 y 49.

con la crisis del sector financiero. En la reunión empresarial conocida como "Atalaya", celebrada en Guadalajara en enero de 1982, los principales dirigentes empresariales advirtieron al gobierno, respetuosa pero claramente, del probable desenlace de la política económica si continuaban las tendencias existentes. Manuel J. Clouthier estimó que la economía mexicana continuaría avanzando en 1982 si el gasto público se ajustaba al presupuesto y se establecían prioridades. Opinó también que debería bajarse la tasa de crecimiento a un promedio de entre 5.5 y 6 por ciento (muy elevado aún). Hizo público el apoyo a López Portillo, pues el sector privado no desconfiaba de la administración y no había incertidumbre por el cambio de gobierno. Su único reproche fue que en 1981 no se había controlado la inflación y se había gastado más de lo producido.<sup>26</sup> El presidente de la COPARMEX, José Luis Coindreau, fue más claro y afirmó que el gobierno siguiente tendría que adoptar una política de realismo económico ("las deudas que se adquieren se pagan, cuestan"), y que debería imponerse una política de austeridad, planeación, cuidado en el gasto y "estímulo a la iniciativa de los particulares". Añadió: "Si el presupuesto en 1982 se sobregira fuertemente como en otros años, será muy peligroso para el futuro nacional".<sup>27</sup> Lo mismo opinaron otros participantes del seminario, como el banquero Agustín Legorreta.

A los problemas tradicionales de la economía nacional se sumó la negativa del gobierno a adoptar políticas anticíclicas. Aunque el desempleo (que afectó sobre todo a la mano de obra no calificada), la ineficiencia y la falta de competitividad de los productores, el "estrangulamiento" del sector agrícola, la migración del campo a la ciudad, la dependencia del exterior y tantos otros fenómenos colocaban al país en una situación difícil, la política económica de López Portillo se apegó poco o nada a la realidad. Cinco años de promesas y esperanzas sustentadas en el petróleo crearon un clima de euforia generalizada. Esa ficción unió estrechamente primero y separó bruscamente después a empresarios y gobierno. Dentro de estos dos grupos fueron pocos los que pronosticaron la crisis, y no fueron escuchados. Financiar el gasto público mediante el endeudamiento externo y la emisión de circulante, provocó una deuda de cerca de ochenta y cinco mil millones de dólares para 1982<sup>28</sup> (cuarenta y cinco mil millones más que en 1976), y agudizó la inflación agravada también por las demandas de aumento salarial y alza de precios. A principios de 1982, incluso los no iniciados intuyeron la devaluación y se generalizó la fuga de capitales, por lo que el gobierno no pudo seguir financiando el déficit que causaba la sobrevaluación del peso en un mercado de libre cambio.

La crónica de la devaluación del peso hasta el 1º de septiembre ilustra los intentos del gobierno por recuperar el control de la situación económica. El 5 de febrero, en la última Reunión de la República (celebrada en el Hospicio Cabañas de Guadalajara), López Portillo dijo la frase que inició su des-

<sup>26</sup> *Excelsior*, 15 de enero de 1982.

<sup>27</sup> *Excelsior*, 17 de enero de 1982.

<sup>28</sup> De la suma mencionada, 58.9 mil millones correspondían al sector público. (Fuentes de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México.)

prestigio personal y el de la figura presidencial: “Esa es la estructura que conviene al país, esa es la estructura que me he comprometido a defender como perro.”<sup>29</sup> Alentados por los acontecimientos posteriores, de esta frase partieron los chistes y bromas que crearon un ambiente semejante al de los últimos meses del sexenio de Echeverría. El 17 de febrero el dólar valía 27 pesos. Por la noche, el Banco de México se salió del mercado cambiario y dejó flotar el peso de acuerdo con la oferta y la demanda. Al día siguiente el dólar se cotizó a 36.85 pesos. El 26 de ese mes, había subido a 45.75 pesos. Finalmente, en agosto el Banco de México intervino y creó el “sistema cambiario múltiple”, que estableció tres tipos de dólar: el preferencial (49.13 pesos), el mexdólar (69.50) y el oficial (75.00). Con este sistema se intentó establecer prioridades para cubrir las necesidades del país, convertir las cuentas bancarias de dólares a pesos y dificultar el libre cambio con una cotización alta. En el mercado negro, el dólar se vendía a 150.00 pesos.

La inflación descontrolada y las devaluaciones —cuyo efecto psicológico fue muy fuerte— propiciaron el descontento popular y aceleraron la fuga de capitales. Tanto el Estado como el sector empresarial temían que el descontento se tradujera en abstencionismo en las elecciones de julio y en brotes de violencia; por eso, ambos instaron a la gente a guardar calma, y pidieron solidaridad en los tiempos difíciles así como la participación en las elecciones; calificaron el voto como una obligación más que un derecho. Manuel J. Clouthier manifestó el 3 de julio que “ahora más que nunca la gente debe acudir a las urnas para expresar su voluntad, y (. . .) no sólo es un deber, sino una obligación. Tenemos confianza en que no habrá mayor abstencionismo (. . .)”<sup>30</sup> A esta situación se sumó otra causa de descontento popular: el muy evidente gasto suuntuario de muchos funcionarios públicos corruptos, que pareció alcanzar extremos inadmisibles.

En julio de 1982, el CCE prometió redoblar sus esfuerzos de inversión y producción para preservar la libertad económica y no permitir una mayor intervención del Estado. Manuel J. Clouthier señaló entonces que era necesario entrar en la etapa de austeridad, tanto en el gobierno como en la iniciativa privada. El CEESP consideró que la política postdevaluatoria “sólo ha incrementado el costo social de una economía que durante cinco años se mantuvo en expansión y sin cuidar el crecimiento inflacionario”, y criticó el programa de ajuste económico. Advirtió sobre el deterioro de la inversión privada y el incremento del desempleo, debido a que la devaluación había vuelto más difíciles las condiciones de las empresas y de algunos sectores sociales. Los dirigentes empresariales afirmaron que la inflación dependería de la política de gasto público, y pidieron la liberalización de precios y una estructura proteccionista similar a la de 1980, año de las mayores utilidades del sector privado.<sup>31</sup>

En agosto, con el nuevo sistema cambiario, la controversia entre el go-

<sup>29</sup> *El Gobierno Mexicano*, febrero de 1982, núm. 65.

<sup>30</sup> *Excelsior*, 4 de julio de 1982.

<sup>31</sup> *Ibid.*

bierno y la iniciativa privada adquirió un tono mucho más severo y constituyó el preámbulo al conflicto de septiembre. La actitud del gobierno y de los empresarios durante los últimos meses del sexenio, fue la de culparse unos a otros por los problemas de la economía. La decepción de ambas partes al enfrentar la realidad económica que habían fomentado, y su necesidad de justificarse ante la opinión pública, agudizaron las tensiones entre los dos grupos y propiciaron el enfrentamiento. El 7 de agosto, todos los organismos empresariales publicaron un manifiesto en la prensa en el que señalaban que:

1) la enorme deuda pública nos ha colocado como el primer país deudor del mundo; 2) es en la adversidad donde los hermanos se unen con mayor fervor y es cuando más se requiere de la entrega y sacrificio de todos para salir adelante; 3) todos los sectores tienen que sufrir el deterioro económico del país y los empresarios piensan seguir trabajando con más laboriosidad, austeridad y productividad; 4) estamos seguros que el gobierno, que siempre ha preconizado la rectoría del Estado en materia económica, acepta plenamente su responsabilidad por las condiciones que han conducido a estas dos devaluaciones: el que el gasto público excediera con mucho a los ingresos del erario y el que para financiar el déficit creciente se recurriera a una enorme deuda externa y al aumento constante del circulante.<sup>32</sup>

A pesar de la apariencia de unanimidad en las posiciones empresariales, volvieron a conformarse las mismas corrientes que se manifestaron al final del echeverriísmo: por un lado, la de las organizaciones nacionales con carácter de “instituciones públicas”, y por el otro, la tendencia más radical que aglutinaba a empresarios de Monterrey y otros del norte del país, principalmente. Como se indicó ya, la única organización nacional que se sumó a esta corriente fue la COPARMEX.

Dentro de la primera tendencia, cabe mencionar las siguientes declaraciones. José Carral, vicepresidente del Bank of America, afirmó que la banca extranjera tenía confianza y deseos de colaborar con las autoridades del país, pero que estaba llegando al límite de su capacidad legal para prestarle a México. Carlos Abedrop Dávila, presidente de la ABM, señaló que existían serias dificultades para mantener los niveles de endeudamiento que exigía la situación interna. Dijo que la crisis se agudizó como consecuencia de la crisis mundial (en particular del mercado financiero internacional) y que

las medidas monetarias que se tomaron responden a la crisis por la que estamos atravesando [y] son las más adecuadas. [...] Tengo absoluta confianza en que las decisiones que toma el gobierno son las mejores posibles dentro de las circunstancias y considero que quienes dirigen la política financiera del país son los hombres con mayor capacidad, experiencia, integridad moral y patriotismo de que dispone México.<sup>33</sup>

Fernando Marina, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la

<sup>32</sup> *Excelsior*, 7 de agosto de 1982.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Ciudad de México (CANACO), demandó serenidad para analizar, ponderar y no desquiciar la realidad. Alfonso Pandal Graf, presidente de la CONCAMIN, afirmó que la devaluación acrecentaba los problemas de liquidez y capacidad de pago de las empresas y que era “mucho muy difícil la situación financiera de las mismas”. Jorge Caso Berten, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, argumentó que el tipo de cambio doble permitiría no afectar el desarrollo económico del país; los especuladores y derrochadores se enfrentarían a una situación difícil y no serían ya los grandes ganadores. Ignacio Barragán de Palacio, presidente de la CANACINTRA, dijo que las medidas propiciarían en lo inmediato un agravamiento de la situación financiera de las empresas; el sistema de dos cotizaciones no frenaría la fuga de capitales y favorecería la corrupción y la especulación.

Dentro de la tendencia radical, José María Basagoiti, presidente de la COPARMEX, señaló que la devaluación no se manejó con realismo económico, y sólo fomentaría la radicalización socioeconómica y la disgregación social. Los empresarios de Nuevo León adoptaron las posiciones más críticas. El director de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, Jorge Arrabide Garza, afirmó que “el sector privado se siente engañado”, ya que

las declaraciones triunfalistas de Ramón Aguirre y Jesús Silva Herzog en el sentido de que el país “había controlado la crisis” eran ficticias y ahora estos dos tipos de cambio representan un control de cambios disfrazado que provocará carestía, escasez, desempleo y una aguda contracción de las inversiones.

Amadeo Garza Treviño, líder de la Cámara Nacional de Comercio de Nuevo León, consideró que

los agudos déficit, los subsidios crecientes y el incremento pavoroso en la deuda externa fueron el resultado de haber confiado el desarrollo del país en el petróleo, así como en la supuesta riqueza que éste daría. Ahora el régimen intenta tapar el sol con un dedo y hasta se da una estrategia de escapismo que podría agudizar los conflictos en lugar de resolverlos.<sup>34</sup>

Posteriormente, en un desplegado conjunto publicado en la prensa nacional el 13 de agosto, todos los grupos empresariales de Nuevo León manifestaron:

1) Las principales causas de los problemas económicos se encuentran en el interior: el excesivo y deficitario gasto público; la multiplicación de empresas estatales, cuyas pérdidas gravitan sobre las finanzas públicas; el crecimiento monstruoso de la burocracia; los subsidios crecientes a diversos bienes y servicios nacionales; el crecimiento desproporcionado del circulante y los controles de precios, entre otras. Esto sin desconocer que la situación económica externa traduce sus efectos hacia el interior del país; 2) la paridad dual del peso es discriminatoria para los ciudadanos, pues concentra en el Estado el flujo de divisas propiciando la corrupción, el favoritismo, la especulación y la desconfianza; 3) para alcanzar el futuro extraor-

<sup>34</sup> *Ibid.*

dinario que puede ofrecer el país, es necesario [sic] por parte del Estado sensatez económica, austeridad en el gasto, un “hasta aquí” al sistema de extorsión-corrupción, cautela, serenidad y reflexión en las decisiones económicas. Del sector empresarial se necesita serenidad, ánimo y confianza en sí mismo, esfuerzo por mantener el empleo en la medida de lo posible, y un empeño para alcanzar mejores niveles de productividad. Del ciudadano, colaboración, esfuerzo y voluntad para fortalecer la paz social, el orden y la ley.<sup>35</sup>

Ante el descontento creciente de los empresarios y la impopularidad del gobierno por causa de las devaluaciones, las autoridades justificaron las medidas de la política monetaria adoptadas hasta agosto argumentando que “hubiera sido criminal que el país se siguiera descapitalizando a causa del uso especulativo, dispendioso y suntuario del dólar”. En un discurso pronunciado el 7 de agosto ante las principales organizaciones patronales y obreras, el gabinete y los directores de los medios de comunicación nacionales, López Portillo expuso las razones para implantar el sistema cambiario múltiple, “inevitable para no agotar las reservas del banco”. Aprovechó la oportunidad para atacar a los empresarios por su falta de competitividad, y para subrayar el hecho de que el sector público fue el único que introdujo divisas al país:

Las divisas que últimamente han entrado [al país], en una proporción muy mayoritaria tienen como origen al propio sector público, primordialmente por la venta del petróleo, por las deudas que en el exterior contrae y que le permiten ingresar [sic] divisas al país. No vienen, desgraciadamente, de las exportaciones del sector privado sino en mínima proporción, porque no tenemos competitividad, porque nuestro consumo interno es muy grande, porque hay recesión externa y no hay demanda para nuestros productos. Por múltiples razones, la enorme proporción de divisas que ingresan vienen del sector público.<sup>36</sup>

Estas frases constituían un reproche a la iniciativa privada, en respuesta a su actitud crítica en los últimos meses. El discurso expresó la idea de que los que sacan dólares de la economía y propician la crisis son aquellos que, al manejar grandes fortunas, no se interesan por el bienestar social y persiguen fines principalmente lucrativos; idea que desarrollaría el presidente en su sexto y último informe de gobierno.

El sexto informe principió recordando la reforma política y señalando sus frutos. A continuación, López Portillo dirigió una breve alabanza a las fuerzas armadas, y abordó el tema de la política exterior que por primera vez había salido de su cauce defensivo para tomar la ofensiva en asuntos internacionales. El presidente expuso el obscuro panorama internacional que, en su opinión, afectó a nuestra economía así como a las intrincadas relaciones de interdependencia económica y política. Después llegó al tema que calificó como “sin duda el más polémico”: la política económica. Al abordarlo, presentó una serie de datos que, citados aisladamente, colocaban a México entre los países más ricos del mundo:

<sup>35</sup> *Excelsior*, 13 de agosto de 1982.

<sup>36</sup> *Unomásuno*, 8 de agosto de 1982.

1) Pasamos del decimotercero al cuarto lugar mundial en reservas probadas de petróleo, después de la URSS, Arabia Saudita e Irán; 2) de 1977 a 1981, el ritmo de crecimiento de la economía nacional superó en 60% al de la economía mundial; en 20% al de los países en desarrollo y socialistas; y fue prácticamente el doble de los desarrollados; 3) la producción industrial de México equivalió a tres veces la del conjunto de países del Medio Oriente; 4) México es el único país en desarrollo que puede legítimamente ser defendido [sic] como semi-industrializado; 5) México es el décimo país más grande del mundo no socialista por el producto interno bruto (PIB) generado en su industria manufacturera. El tamaño de este sector es, en términos absolutos, superior al de Holanda, Suecia, Bélgica, Dinamarca y Noruega; catorce veces más grande que el de Singapur; once que el de Chile; cinco que el de Corea del Sur; y dos que el de Argentina y el de la India. Esta industria genera el 25% del PIB y el 20% del empleo total, proporciones similares a las de algunos países desarrollados.<sup>37</sup>

De esta manera, López Portillo planteó lo que llamaba “el lado claro del gigantesco esfuerzo nacional que será permanente” (p. 50). El lado oscuro era la situación financiera:

Todos estos factores: altas tasas de interés afuera que arrastran a las de adentro, baja en el precio de las materias primas, exceso de importaciones, disminución de exportaciones, baja en el turismo externo, aumento del turismo nacional al extranjero, colocaron a nuestra economía en una situación de particular vulnerabilidad. [Si esto hubiera sido el problema], la potencialidad del país lo hubiera podido resolver con esfuerzo, pero sin deterioro [. . .]. Con lo que no pudimos fue con la pérdida de confianza en nuestro peso, alentada por quienes adentro y afuera pudieron manejar las expectativas y causar lo que anunciaban con el solo anuncio. Así de delgada es la solidaridad. Así de subjetiva es la causa fundamental de la crisis (p. 53).

Según el presidente, la fuga de divisas en los dos o tres últimos años del sexenio ascendió a cincuenta mil millones de dólares, equivalentes a la mitad de los pasivos totales con que contaba en esos momentos el sistema bancario mexicano en su conjunto, y a cerca de dos tercios de la deuda pública y privada documentada del país (p. 54). Después de atribuir a la influencia del exterior la mayor parte de nuestros problemas económicos, López Portillo abordó en el Mensaje al Congreso de la Unión “los grandes males” que se manifestaron en el orden interno. Tres cosas fallaron, a su juicio:

1) La conciliación de la libertad de cambios con la solidaridad nacional; 2) el manejo de una banca concesionada, expresamente mexicanizada, sin solidaridad nacional y con fines de especulación; 3) la concepción de la economía mexicanizada como derecho de los mexicanos sin obligaciones correlativas.

La identificación de los banqueros con varios de los males nacionales fue constante en el discurso:

<sup>37</sup> Véase el “Sexto Informe” de López Portillo en *El gobierno mexicano*, México, Coordinación General de Comunicación Social, septiembre de 1982, pp. 49-50. Indicamos en el texto las páginas de este informe.

Puedo afirmar que en unos cuantos, recientes años, ha sido un grupo de mexicanos —sean los que fueren— en uso de derechos y libertades pero encabezado, aconsejado y apoyado por los bancos privados, el que ha sacado más dinero del país que los imperios que nos han explotado desde el principio de nuestra historia (p. 68).

El golpe final a los empresarios fueron los dos decretos para nacionalizar la banca y establecer el control de cambios, al grito de: “¡Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear!” (p. 69). La nacionalización de la banca mexicanizada, como subrayó López Portillo, implicaba que los banqueros mexicanos mantenían lazos con el exterior. La ABM apareció como el enemigo que se llevaba el dinero para enriquecer a otras potencias, como una quinta columna que perjudicaba al país y perseguía fines ajenos al interés nacional. Se identificó así a un enemigo en quien descargar la responsabilidad del gobierno. El presidente esperaba recuperar la confianza en los líderes y en las instituciones con una medida que pudieran apoyar grandes sectores de la población. Rápidamente se organizaron manifestaciones gigantes en la ciudad de México y en las capitales de los estados, que brindaron su apoyo a las medidas presidenciales. Como era de esperar, los partidos políticos de izquierda, los sindicatos y las agrupaciones afines celebraron la medida. Las alabanzas llovieron y se comparó a López Portillo con los otros presidentes nacionalizadores, Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos; sus retratos aparecieron juntos en carteles.

La Iglesia emitió un documento episcopal en el que señalaba como indispensable que quien administrara la banca lo hiciera honesta y lealmente. Los obispos manifestaron dudas y temor de que la nacionalización fuera a iniciar un proceso de estatismo radical.<sup>38</sup> La Barra Mexicana de Abogados consideró que la expropiación de la banca constituía “una de las muchas expresiones derivadas de la inobservancia de la estructura legal del país y (. . .) un acto contrario a la Constitución, pero afín al modo autoritario y personal de gobernar del presidente de la República”.<sup>39</sup>

#### EPÍLOGO: LOS INTENTOS DE MOVILIZACIÓN EMPRESARIAL

Al final del sexenio del presidente Echeverría, hubo una gran movilización de empresarios y otras organizaciones cívicas. El verbalismo desbordado en la política interna y el tercermundismo ajeno a las mayorías del país, convirtieron al presidente en espantajo de empresarios y clases medias. Sin embargo, los intereses básicos de estos grupos no fueron afectados, excepto por las inesperadas expropiaciones de tierras en el noroeste del país, al final del sexenio. 1976 se caracterizó por una enorme tensión social; el rumor, la burla y las agresiones llenaron las planas de los periódicos y la vida social. Pero es necesario insistir que, en lo esencial, no se vulneró los intereses básicos de los grupos

<sup>38</sup> *Proceso*, 20 de septiembre de 1982.

<sup>39</sup> *Proceso*, 1° de noviembre de 1982.

“satanizados”. De ahí que al final del gobierno de Echeverría y a principios del siguiente se haya reforzado el movimiento empresarial, y hayan surgido con vigor en todos los organismos empresariales fuertes corrientes que propugnaban una mayor participación política.

La paciencia inicial de López Portillo, los esfuerzos de los dirigentes de los organismos empresariales nacionales, y —sobre todo— los ingresos por concepto de las exportaciones de petróleo que comenzaron a llegar al país en 1979 junto con el crédito externo, permitieron que se impusiera la sensatez y que se estableciera, además, un maridaje entre empresarios y gobierno. Sin embargo, este maridaje no estaba fundado en valores nacionales que dieran cohesión a la sociedad, sino en un abierto y desnudo interés. Ciertamente, a raíz de los graves errores de la política económica gubernamental, sólo podía esperarse que los empresarios y aun las clases medias asumieran un comportamiento económico racional para los individuos, pero fatal para el país. Si lo único barato en México era el dólar, cabía suponer que el industrial con compromisos en moneda extranjera e incluso el simple ahorrador se “cubrirían”. Si a lo anterior añadimos las pautas de consumo en el extranjero —ampliamente difundidas por los medios de comunicación— que adoptaron las élites política y empresarial, con los subsecuentes efectos de demostración, podemos imaginar los resultados para el país.

Se explica la amargura de un hombre sentimental como López Portillo —a quien habían calificado de “presidente de la burguesía” o “de la oligarquía”—<sup>40</sup> por el vacío empresarial que encontró en el último trimestre de su gobierno. A la debilidad, agotamiento o desilusión del presidente, correspondieron los de los empresarios. Mencionaremos las principales características de la oposición empresarial a la nacionalización de la banca. Conviene subrayar que una medida de esa trascendencia no provocó una reacción proporcional, sino que ésta fue incluso menos fuerte que la de fines de 1976. Las explicaciones son muchas, pero quizá una de las principales —si no es que la fundamental— radique en la falta de liderazgo empresarial. Clouthier jamás estuvo a la altura de Andrés Marcelo Sada. La familia Garza Sada (“El Grupo”) careció, en 1982, de cualquier legitimidad para encauzar un movimiento de protesta. El ex-presidente de la CONCANACO, Emilio Goicochea, convertido en colaborador de la página editorial de *Excelsior*, describió los orígenes del movimiento de oposición empresarial a la nacionalización en dos artículos que publicó este diario el 10 y el 17 de noviembre, de los que transcribimos un fragmento.

El primer chispazo surgió en Chihuahua, con una gran manifestación pública; luego vino la reunión del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla y Tlaxcala y más tarde el evento de las Cámaras de Comercio y de la Propiedad Urbana, la delegación de CANACINTRA y el Centro Empresarial de Saltillo y, por fin, la primera de las reuniones de “México en la Libertad”, en Monterrey, que en forma sucesiva y reuniendo regionalmente a empresarios, padres de familia, organismos pro-

<sup>40</sup> *Excelsior*, 30 de octubre de 1982.

fesionales, organizaciones cívicas, clubes de servicios, etc., se han efectuado en Torreón, León, Mérida y Culiacán. Son ya miles los ciudadanos —hombres y mujeres, sin distinción profesional o por actividad— que se han reunido para rechazar la ruptura del estado de derecho con la estatización de la banca, la violación de la Constitución, el creciente intervencionismo del gobierno en la vida social, y para manifestar el propósito de participar en forma responsable y creciente en la vida pública por medio del ejercicio de todos los derechos, incluido el político, para preservar íntegras las libertades de México. “México en la Libertad” es mucho más que gremialismo, es despertar de conciencia cívica plural. No es una acción empresarial sino un canal de expresión ciudadana y ordenada, dentro de los cauces del orden y el derecho. No se quiere entender que en las reuniones de “México en la Libertad”, lo único que se busca es el retorno al respeto del orden jurídico, el realismo económico, la ortodoxia política sin adoptar ideologías extrañas e imperialistas, y alentar la nacionalización de la política mediante la participación de todos en ella.

Después de esta descripción, Goicochea menciona la “sinceridad y valentía” con que analizaron la situación personas como Fernando Illanes (conocido abogado patronal), Francisco Calderón (director del CCE), el licenciado Luis Felipe Bravo y el arquitecto Federico Muggenburg (director del Centro de Estudios Sociales del Consejo Coordinador Empresarial). Pero ninguno de los dirigentes mencionados demostró capacidad para encabezar un gran movimiento que rebasara los círculos empresariales. A pesar de la falta de liderazgo político, hubo intentos bastante limitados de plantear una oposición política al gobierno. Como al principio del sexenio, los dirigentes nacionales guardaron mayor compostura y prudencia, mientras que los del interior del país —principalmente los del norte— fueron los más entusiastas partidarios de “México en la Libertad”. En el marco de este movimiento, caracterizado por su heterogeneidad, tuvieron lugar varios actos.

En León, Guanajuato, el presidente del CCE habló, según la prensa, ante más de dos mil personas de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Colima, Durango, Nayarit, Zacatecas, Michoacán y San Luis Potosí, sobre temas relacionados con la familia, la religión, la actividad política y la cultura, y manifestó claramente que “los empresarios no buscan el poder político, sino el realismo económico y no populista”. También señaló que los empresarios anhelan un México libre, democrático, sin lucha de clases y equilibrado, ya que “esto es también más importante que la banca, más importante que nuestros negocios: a la libertad tenemos derecho todos y tenemos la obligación de defenderla cueste lo que cueste”. Por su parte, el arquitecto Muggenburg consideró que había llegado el momento de “defender las libertades y los patrimonios. (. . .) Es hora de las definiciones y México se bifurca entre la Nación real y el Estado totalitario”.<sup>41</sup>

En noviembre se llevó a cabo otra reunión en la ciudad de Culiacán, encabezada, entre otros, por los presidentes de los Consejos Empresariales de Sinaloa, Jorge del Rincón (posteriormente candidato del Partido Acción Na-

<sup>41</sup> *Excelsior*, 28 de octubre de 1982.

cional, PAN, a la presidencia municipal de Culiacán) y por el presidente del Consejo de La Laguna, Alejandro Gurza (al parecer también miembro del PAN). Del Rincón manifestó que “llegaremos hasta donde el empresario nacional quiera, formando agrupaciones cívico-políticas y fortaleciendo a los partidos que, de acuerdo con nuestras convicciones, puedan garantizar nuestras acciones”. Alejandro Gurza consideró que el sistema político nacional “está podrido”, por lo que debe llevarse a cabo un cambio radical en la conciencia, la economía, las finanzas y el desarrollo total de México, para que el poder “manipulado por el Estado” sea compartido por varios sectores.<sup>42</sup> En la reunión de Culiacán, en la que participaron el presidente del CCE, Manuel Clouthier, y varios miembros de asociaciones de comerciantes e industriales, de grupos cívicos, de uniones femeninas y del Club de Leones, Clouthier subrayó que de ninguna manera “Revolución es sinónimo de estatificación, porque entenderlo así es fomentar un Estado sin sociedad”. Por otra parte, negó que las reuniones “México en la Libertad” constituyeran “focos de tensión o de presión”, hizo una defensa de la participación política y criticó la apatía.<sup>43</sup>

La reunión del CCE en Chihuahua adoptó un tono más radical, por considerar “que en la política inflacionaria que priva en el país hay una estrategia de tipo marxista”. Simultáneamente, se llevaron a cabo otras reuniones en Mérida y Guadalajara. En la primera, el líder Nicolás Madaguar declaró:

Luchemos contra la demagogia, el hostigamiento y la corrupción. Rechacemos el monopolio capitalista y el avance indebido del Estado en la economía. [. . .] Se ha puesto a discusión los principios de la libertad de la persona frente al Estado, con posiciones ideológicas, económicas y políticas que proclaman la primacía de la colectividad amorfa y despersonalizada sobre la persona concreta, anulando las libertades en aras de una pretendida y utópica igualdad absoluta que se presenta como condición de justicia.<sup>44</sup>

En esta reunión también participaron Manuel Clouthier, Francisco Calderón y Emilio Goicochea Luna. Este último acusó a muchos empresarios de haberse metido a la política y dijo de ellos que “al probar las mieles de la corrupción nos dieron la espalda”. En Guadalajara, los dirigentes Carlos González Lozano y Fernando Pérez Jiménez negaron que las reuniones de “México en la Libertad” atentaran contra el Estado, ya que se realizaban para manifestar opiniones, derecho garantizado por la Constitución. Por su parte, Pérez Jiménez, presidente del Consejo Empresarial de Jalisco, declaró: “Hemos perdido la libertad económica y un poco de libertad política, pero todavía nos quedan muchas libertades que no queremos perder y que defenderemos”. Además, reiteró que no existe enfrentamiento con el Estado, ya que “sólo se pretende ser escuchado como sector”.<sup>45</sup>

Como síntesis de todas las reuniones celebradas en el país, una “Comi-

<sup>42</sup> *Excélsior*, 9 de noviembre de 1982.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Excélsior*, 7 de noviembre de 1982.

<sup>45</sup> *Excélsior*, 8 de noviembre de 1982.

sión Regional Coordinadora” publicó en *Excélsior* el 9 de noviembre una convocatoria “a los mexicanos del sector privado por la unidad y la libertad de México”. Esto confirma nuestra hipótesis de que la mayor radicalización política de los empresarios ha tenido lugar en las ciudades de provincia, sobre todo en el norte del país. El manifiesto dice claramente que “la provincia ha hablado”: empresarios, organizaciones cívicas, clubes de servicios y agrupaciones profesionales han recordado

que por encima de sus actividades particulares están sus deberes con la Nación, y conscientes de que hay valores fundamentales que es importante preservar hoy más que nunca, se han reunido pacíficamente para ejercer su libertad de expresión sin perjudicar al resto de la ciudadanía, para demostrar que la defensa de la libertad y los derechos no implica el perjuicio a los demás ni el rompimiento del orden.

Estos grupos consideraban necesario que sus planteamientos se escucharan en el centro de la nación:

Hay un sentir nacional unificado y acorde en el rechazo a la arbitraria estatización de la banca, la creciente intervención del gobierno en la economía, la amenaza de que el gobierno absorba a la sociedad y de que la ley, incluida la Constitución, sea un instrumento en manos de los poderosos, y no una expresión del orden y la justicia que los modere. Ante esta necesidad patriótica, la provincia ha decidido reafirmar la unidad de “México en la Libertad” y la responsabilidad que tenemos de reconstruir nuestra Nación que ha sido saqueada por la Internacional Socialista. Por ello convocamos especialmente a los ciudadanos libres de la zona metropolitana y estados vecinos a la asamblea cívica que se realizará el próximo 26 de noviembre en el hotel María Isabel de la ciudad de México.

Los dirigentes empresariales de las organizaciones nacionales comenzaron en esas fechas a frenar las reuniones de “México en la Libertad”. Manuel Clouthier afirmó, en el Distrito Federal, que las relaciones entre el Estado y el sector privado no se habían deteriorado por las declaraciones del presidente López Portillo, y que los empresarios se encontraban tranquilos en espera del nuevo gobierno.<sup>46</sup> Al día siguiente abundó en el tema, y declaró que para crear un clima de concordia necesario en esos momentos de crisis económica y cambio de poder, el CCE había recomendado aplazar las reuniones regionales de “México en la Libertad” en Hermosillo, Oaxaca y el Distrito Federal, pues no quería que “grupos ajenos a la buena fe de nuestro sector se apoderen del despertar cívico creado por estas asambleas, con el fin de polarizarlas y radicalizarlas”.<sup>47</sup> A pesar de la recomendación del presidente del CCE, se llevó a cabo todavía una reunión en Mexicali, el 22 de noviembre, en la que participaron el dirigente local, Juan Ramos, el presidente de la COPARMEX, José María Basagoiti, y el presidente patronal de La Laguna, Alejandro Gur-

<sup>46</sup> *Excélsior*, 11 de noviembre de 1982.

<sup>47</sup> *Excélsior*, 12 de noviembre de 1982.

za. Ante ochocientos empresarios, según la prensa, Basagoiti habló en nombre de Clouthier y afirmó que

las cúpulas empresariales de México no persiguen el poder político ni pretenden imponer dogmas a la gente. Sólo deseamos la libertad de la democracia para que todos aportemos la verdad, porque actualmente vivimos en la confusión y ello es muy grave.<sup>48</sup>

Así concluyó un sexenio en el que empresarios y Estado establecieron una estructura de colaboración basada principalmente en una ambición desmesurada, que fomentó grandes ilusiones a las que se aferró el presidente López Portillo en el último año de su gobierno, cuando todo indicaba que no podría continuar con el ritmo de gasto que se había propuesto. La nacionalización de la banca abrió un capítulo en la historia del país: habrá que definir nuevamente las relaciones entre los empresarios y el Estado. La reacción empresarial demostró una vez más que la iniciativa privada constituye “un gigante económico y un enano político”.

<sup>48</sup> *Excelsior*, 23 de noviembre de 1983.